

conflictos violentos en el área de la empresa privada. Y abundan en las empresas del sector público, en la Sanidad y en la Educación, igualmente públicas.

En Reinosa, paradigma actual del desmadre de origen económico, las tres empresas siderúrgicas del sector público instaladas allí han decidido reajustar sus plantillas, como parte de la reconversión industrial que afecta al sector. La principal de ellas, Forjas y Aceros, daba trabajo a 2.700 personas en 1974. Doce años después, la plantilla se limitaba a 1.250 trabajadores. El plan implica reducirla, ahora, al cincuenta por ciento.

De las tres empresas vive la población. El despido en masa significa la desocupación para miles de hogares. «Si nos quitan las fábricas nos quitan la vida», dice Julián Romero, 77 años, obrero jubilado de Reinosa. Y Claudio Rodríguez, 37 años de edad, veintidós de ellos en Forjas y Aceros, da en una de las claves que están detrás de muchos de los conflictos del actual desmadre español: «Hemos salido a la calle porque estamos acojonados.»

La amenaza que pesa sobre Reinosa es dramática, y requeriría de las autoridades una especial sensibilidad para resolverla. Pero no es mayor que la que soportan otras comarcas y empresas que han pasado y tendrán que pasar por semejantes vía crucis.

El problema añadido de los trabajadores de Reinosa es que se trata de empleados del sector público, los únicos que quieren —y a menudo pueden— seguir trabajando en empresas que dan pérdidas cuantiosas, puesto que producen bienes que no son rentables. Y pueden darse ese lujo porque quienes enjugan esas pérdidas, quienes financian el mal funcionamiento de empresas obsoletas, son los ciudadanos que, desde la producción en el sector privado, pagan sus impuestos y transfieren riqueza a un sector improductivo.

CADA contribuyente paga al año unas cien mil pesetas de promedio para que la mayoría de los trabajadores del sector público puedan seguir cobrando sus salarios. De ese modo, el ciudadano español se ve privado de bienes culturales e institucionales que le son imprescindibles. El Estado gasta más dinero en enjugar lo que pierde cada año su catastrófica empresa de ferrocarriles, la Renfe, que en la administración de justicia; una comparación nada ociosa que pone en evidencia un auténtico esperpento nacional.

Decía Jean François Revel en un reciente artículo: «Ya no pueden coexistir por mucho tiempo en nuestras sociedades dos sectores: un sector expuesto a la competencia internacional, en el cual las empresas corren el riesgo



Gilberto Viliani



G. Cerezo

de quebrar y los trabajadores de perder su empleo y, enfrente, un sector protegido donde la empresa queda pensada de la competitividad y la productividad, en la que los asalariados tienen la seguridad del empleo.»

Los trabajadores del sector público se sienten privilegiados y «una característica constante del privilegio que «su detentador se considera invulnerable», recuerda Revel. Los privilegiados, los intocables, tienen sin embargo más motivos que otros que no lo para estallar en iras incontenidas cuando les tocan sus privilegios, derecho a mamar eternamente, a quien caiga, de la gran teta del Estado.

ESTE aspecto, con todo, difícilmente será capaz de explicar toda la ferocidad de Reinosa o la desazón de los trabajadores del sector público — como los mineros de Hunosa — y por lo menos el resto del desmadre español.

La amplia mayoría de los colectivos en conflicto coinciden en expresar frustración por la ausencia de diálogo con las autoridades. Según una reciente encuesta de CAMBIO16, el 50 por ciento de los trabajadores creen que la huelga es el único recurso para ser atendidos por el Gobierno. Este hecho reiteradas veces que no existe disposición para el diálogo. Han notado lo difícil que es negociar con trabajadores que no tienen una única representación o que, a veces, ni siquiera saben bien lo que quieren, o plantean reivindicaciones delirantes.

Estas percepciones contrapuestas evidencian, en todo caso, que no existe diálogo ni comprensión entre una parte importante de la sociedad y los representantes del Estado, el Gobierno, de los que se espera la solución a las reclamaciones populares.

«Las manifestaciones pacíficas no valen para nada, según nuestra experiencia», dice Manuel González, 45 años, trabajador de Forjas y Aceros de Reinosa. «No le importan a nadie, estamos solos», se queja Rodríguez Prada, portavoz de la Asociación de Profesores de Enseñanza Media. «Empezamos repartiendo folletos informativos, pero nadie nos hizo caso, así que aumentó la crispación», recuerda Javier Fajardo Sánchez, miembro del comité de empresa de Forjadores, protagonista de los desmadres de Puerto Real (Cádiz). Todos han aprendido de la reciente experiencia histórica.

En los primeros meses del año los estudiantes de enseñanza media y universitarios, que venían bregados por sus reivindicaciones con pena de gloria, descubrieron un viejo método para atraer la atención de todo el mundo: los desórdenes callejeros cargados de violencia.

Encontraron en los ministros socialistas una cierta sensibilidad por simpatía; ellos también habían corrido delante de los *grises*, como ahora los jóvenes corrian delante de los *maderos*. Y para sorpresa de todo el mundo, sobre todo de los dirigentes estudiantiles, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, se sentó a negociar todo lo negociable con un grupo de nozos peleones.

A Maravall no lo desanimó el hecho de que una parte de las reclamaciones estudiantiles pareciera pergeñada durante un viaje alucinatorio provocado por el LSD. El ministro sacó de la chistera del Estado, sin tener que pasar por el Parlamento, cuarenta mil millones de pesetas para pagar las concesiones hechas a los ruidosos manifestantes. Y tantas pascuas.

El resto del país contempló azorado esta milagrosa multiplicación de los panes y los peces del presupuesto y aprendió el método: la única manera de atraer la atención de los arrogantes e insensibles ministros era a golpe de Molotov, detrás de una barricada y empuñando un tirachinas. A fin de poder hablar con el poder, era necesario demostrar poder, aunque fuera para aumentar el desmadre. El depredador mayor, *El Cojo* Manteca, se convirtió entonces en una especie de pequeño héroe de las luchas estudiantiles (pese a que en su vida no ha usado los libros ni para sentarse en ellos) y en paradigma de los métodos reivindicativos nacionales.

Todos habían constatado que el Gobierno padecía de sordera social y que, a falta del buen funcionamiento de las instituciones intermedias, había que hacer mucho ruido para ser escuchado detrás de los muros de palacio.

¿Qué había ocurrido? En 1982, con las expectativas y las esperanzas de buena parte de la población, el Partido Socialista Obrero Español había sido ungido por una mayoría del electorado para que gobernara el país y diera satisfacción a las necesidades más acuciantes de la población. Había prometido hacerlo. Pero, según destacan varios expertos, tan pronto como ocupó el poder comenzó a protagonizar un espectáculo de *strip-tease* completo; por dentro se quitó las últimas vestiduras ideológicas; por fuera se deshizo de las promesas repetidas incansablemente desde las tribunas durante la campaña electoral.

LOS socialistas, en la actualidad —dice Ignacio Sotelo, destacado ideólogo del PSOE, pero con una postura crítica—, hacen una política «que poco o nada tiene que ver con las ideas, incluso con los ideales que habían proclamado hace diez años». Sotelo se sorprende de algo «aún más curioso y significativo»: «que se hayan



Mariano Casado



Luis Rubio

abandonado los cauces pensados sin la menor dificultad ni apenas tensiones, como si esta conversión hubiese sido lo más natural y de todos esperada».

Tras semejante transformismo, el PSOE no tuvo mayores inconvenientes en anunciar que *donde dije digo, digo Diego*; ni creación de 800.000 puestos de trabajo, ni «de entrada, la OTAN, no», ni reforma profunda de la administración pública. Y, sobre todo, nada de transformaciones a fondo del Estado conformado después de la Guerra Civil, durante el franquismo.

Paradójicamente, «el éxito de los socialistas —especula Sotelo— se cifrará en vender lo viejo presentado con las nuevas envolturas de lo europeo, lo progresista, lo democrático. En el fondo nada tranquiliza tanto como comprobar el orden eterno e inmutable de las cosas, al percibir que los jóvenes revolucionarios reproducen conductas y palabras de los que detentaron el poder antes que ellos». La anécdota de Felipe González en el *Azor*, el yate del Generalísimo, resulta todo un símbolo.

LOS socialistas parecieron sentirse cómodos instalados en ese aparato y dentro de un estilo tradicional que invitaba a la sordera social, al ejercicio ensoberbecido del poder, a la arbitrariedad más o menos legalista dictada desde el encierro de palacio. En la práctica, bajo *el Gobierno del cambio* (sólo una paradoja más), se siguió privilegiando a los poderosos y ensañándose con los débiles. Nadie pagó la crisis de la Banca. José María Ruiz Mateos gozó de una prisión dorada en su lujoso chalé de Somosiaguas. El coronel De Meer puede vistar a Gadafi cuando le dé la gana. Todo muy legal; con la legalidad instituida por el antiguo régimen que permanece, básicamente, intocada.

En algún sentido, el PSOE recibió los aspectos más negativos, el presente griego, de la transición sin ruptura desde el anterior régimen. Y sus dirigentes tuvieron la ingenuidad de suponer que podía administrarse cómodamente el país desde un Estado, no sólo débil como siempre lo ha sido en España, sino caduco en sus estructuras, que no se corresponden con las transformaciones que ha sufrido la sociedad española y europea. Creyeron que bastaba retocar lo que ya había y, sobre todo, adaptarse a los usos tradicionales del poder que ese mismo Estado sugería.

Otra cosa hubiera sido difícil, sin duda. Ya lo decía Maquiavelo: «Nada más difícil de llevar adelante, nada más dudoso en el éxito, ni más arriesgado en su tratamiento diario, que cambiar las cosas e introducir un orden nuevo. El que lo intenta se gana el odio de aquellos que se beneficiaban con el viejo régimen, sin conseguir más